



SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO

Medellín, veintitrés de mayo de dos mil veintitrés

S19-168

Proceso: ORDINARIO LABORAL consulta sentencia
Demandante: **GRUPO DIGORE S.A.S.**
Demandado: **COLPENSIONES**
Radicado No.: 05001-31-05-017-2018-00363-02
Decisión: **DECLARA IMPROCEDENTE EL GRADO DE CONSULTA**

LINK: [19-168 \(017-2018-00363\)](#) expediente digital

La Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, conformada por los Magistrados **MARÍA NANCY GARCÍA GARCÍA**, **MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO** y como ponente **ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA**, procedía a revisar la sentencia proferida en el proceso de la referencia en el grado jurisdiccional de consulta. No obstante, tal actuación devine en improcedente por las razones que a continuación se pasan a explicar:

1. ANTECEDENTES

El representante legal de la sociedad GRUPO DIGORE S.A.S. presentó demanda ordinaria laboral contra Colpensiones, con la finalidad de obtener el reconocimiento y pago de las costas del proceso que le fueron cedidas por quien fungió como demandante en otro proceso ordinario que culminó con la expedición de resolución de cumplimiento a través de la cual le otorgaron a la señora María Luisa Escobar Bermúdez la pensión de sobrevivientes allí deprecada, trámite que se llevó a cabo con la intervención de la firma en mención, quien actuó como su apoderado.

Aclara que administrativamente Colpensiones negó el pago de las costas aquí deprecadas aduciendo que se encontraba prescrita la obligación, por lo que solicita no sólo el reconocimiento de tal rubro, que asciende a \$16.046.250, sino además los intereses moratorios legales o subsidiariamente la indexación de las condenas y las costas del proceso.

Inicialmente el juzgado de origen, bajo el entendido que se trataba de un proceso ejecutivo laboral, libró mandamiento de pago, decisión objeto del recurso de alzada, oportunidad en la que esta Sala, bajo el entendido que NO era dable cercenar el derecho de acción y al margen de la vocación de prosperidad de la súplica, revocó la decisión y ordenó darle trámite de un proceso ordinario laboral.

Fue así como tras surtirse las etapas que regulan los artículos 77 y 80 del CPT y la SS, el juzgado de origen emitió sentencia absolviendo a Colpensiones de la totalidad de pretensiones incoadas en su contra por el GRUPO DIGORE S.A.S., declarando probada la excepción de prescripción, pero se abstuvo de condenarlos en costas.

Ninguna de las partes apeló lo resuelto, por lo que el proceso fue remitido ante esta Corporación, para que fuera conocido en virtud del grado jurisdiccional de CONSULTA.

2. CONSIDERACIONES

En cuanto al grado jurisdiccional de Consulta, el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, en su artículo 69, modificado por el artículo 14 de la Ley 1149 de 2007, establece que:

“...ARTICULO 69. PROCEDENCIA DE LA CONSULTA. <Artículo modificado por el artículo 14 de la Ley 1149 de 2007. Además de estos recursos existirá un grado de jurisdicción denominado de “consulta”.

Las sentencias de primera instancia, cuando fueren totalmente adversas a las pretensiones del trabajador, afiliado o beneficiario serán necesariamente consultadas con el respectivo Tribunal si no fueren apeladas.

También serán consultadas las sentencias de primera instancia cuando fueren adversas a la Nación, al Departamento o al Municipio o a aquellas entidades descentralizadas en las que la Nación sea garante. En este último caso se informará al Ministerio del ramo respectivo y al Ministerio de Hacienda y Crédito Público sobre la remisión del expediente al superior...”. (Negrilla fuera de texto).

Como quedó visto, el grado jurisdiccional de la consulta no se instituyó a favor de entidades y/o sociedades como la demandada, que no ostentan la calidad de trabajador, afiliado ni beneficiario, requisito *sine qua non* para que proceda la consulta contra la decisión que le fue totalmente adversa

Justamente la Corte Constitucional en sentencia C-424 del 8 de julio de 2015, al declarar la exequibilidad del artículo transcrito, preciso que:

Corte Constitucional al analizar la constitucionalidad del principio de consonancia en las sentencias de segunda instancia -artículo 35 de la Ley 712 de 2001- declaró su exequibilidad a través de la sentencia C-968 de 2003, en el entendido que las materias objeto del recurso de apelación incluyen siempre los derechos laborales mínimos irrenunciables del trabajador. Adicionalmente, en dicha oportunidad, este Tribunal se refirió al grado jurisdiccional de consulta en los siguientes términos:

A diferencia de la apelación, la consulta no es un medio de impugnación sino una institución procesal en virtud de la cual el superior jerárquico del juez que ha dictado una providencia, en ejercicio de la competencia funcional de que está dotado, se encuentra habilitado para revisar o examinar oficiosamente, esto es, sin que medie petición o instancia de parte, la decisión adoptada en primera instancia, y de este modo corregir o enmendar los errores jurídicos de que ésta adolezca, con miras a lograr la certeza jurídica y el juzgamiento justo, lo cual significa que la competencia funcional del superior que conoce de la consulta es automática, porque no requiere para que pueda conocer de la revisión del asunto de una petición o de un acto procesal de la parte en cuyo favor ha sido instituida. (Subraya fuera de texto)

La consulta es un mecanismo *ope legis*, esto es, opera por ministerio de la ley y, por tanto, suple la inactividad de la parte en cuyo favor ha sido instituida cuando no se interpone por ésta el recurso de apelación, aunque en materia laboral el estatuto procesal respectivo la hace obligatoria tratándose de entidades públicas. Además, la consulta está consagrada en los estatutos procesales generalmente con base en motivos de interés público con el objeto de proteger a la parte más débil en la relación jurídica que se trate.

La jurisprudencia constitucional ha expresado que la consulta no es un auténtico recurso sino un *grado jurisdiccional* que habilita al superior jerárquico para revisar la legalidad de algunas providencias, por mandato de la ley y sin que medie impugnación por parte del sujeto procesal que se considere agraviado.” (Subraya fuera de texto)

3.2.4. Lo anterior, se puede resumir en que el grado jurisdiccional de consulta (i) no es un recurso ordinario o extraordinario, sino un mecanismo de revisión oficioso que se activa sin intervención de las partes; (ii) es un examen automático que opera por ministerio de la ley para proteger los derechos mínimos, ciertos e indiscutibles de los trabajadores y la defensa de la justicia efectiva y, (iii) al ser un control integral para corregir los errores en que haya podido incurrir el fallador de primera instancia, no está sujeto al principio de non reformatio in pejus.

(...)

si bien la norma Superior autoriza al Legislador para establecer el grado de consulta, a su vez, la jurisprudencia constitucional advierte que dentro del diseño procesal de la figura no puede existir arbitrariedad o disminución de las garantías fundamentales para asegurar el pleno ejercicio del acceso a la administración de justicia, y es en este punto en el que al **tratarse de los derechos de la parte más débil** de la relación laboral, que la Constitución en distintas disposiciones **establece un tratamiento tuitivo para el trabajador.**

(...)

Unido a lo anterior, la sentencia C-968 de 2013 hizo una referencia expresa sobre el tipo de derechos que se buscan proteger mediante la institución de consulta, así:

Como puede apreciarse, la consulta se halla instituida para la protección de los derechos mínimos, ciertos e indiscutibles del trabajador que, a manera de principios básicos, contiene el artículo 53 de la Carta Política, pues este grado jurisdiccional opera cuando las sentencias de primera instancia “fueren totalmente adversas a las pretensiones del trabajador”, siempre y cuando dichas providencias no hayan sido apeladas. Así mismo, la consulta persigue la defensa de los bienes públicos ya que procede frente a esas mismas providencias cuando fueren adversas, total o parcialmente, a la Nación, al departamento y al municipio, evento en el cual no está condicionada a que se haya interpuesto el recurso de apelación.

Así regulada la consulta en materia laboral, se erige como un instituto procesal independiente de los recursos propiamente dichos, tanto que puede llegar a afirmarse

que representa algo más que un factor de competencia, ya que propende por la realización de objetivos superiores como son la consecución de un orden justo y la prevalencia del derecho sustancial. Así lo ha reconocido la jurisprudencia constitucional al afirmar que “si la consulta la ubica el legislador dentro de la jurisdicción y no dentro de la competencia, quiere decir eso que la integra como elemento esencial de la administración de justicia

En síntesis, (i) la consulta es una figura que busca garantizar los derechos de la parte vencida en pleito, en este caso, **la más débil de la relación contractual, razón por la cual, en el caso laboral se centra en la defensa de los derechos ciertos e indiscutibles del trabajador**; (ii) así mismo es una expresión de la doble instancia sin que este atada a los principios que la rigen, ya que procura garantizar efectivamente los derechos de las partes en el proceso (...). ”

(Resaltos y subrayas propias)

Claro es que la génesis de la norma aludida es la protección de los derechos de la parte más débil, que en el caso objeto de análisis, en gracia de discusión, sería la beneficiaria de la prestación que inicialmente se disputó, quien no es demandante en éste proceso.

Aunado a lo anterior, en múltiples ocasiones la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado sobre la improcedencia del grado jurisdiccional de consulta en tratándose de sentencia de primera instancias adversas a entidades distintas a los precisos términos del artículo que taxativamente las individualizó, advirtiendo que en esos casos el Tribunal carecía de competencia funcional para proferir un fallo. Entre ellas se destaca la de radicación 31.961 M.P. Gustavo José Gnecco Mendoza, donde adujo que:

En los tres cargos que se presenta, el impugnante le censura al tribunal que asumiera el grado jurisdiccional de consulta, pese a que no se daban los requisitos para ello, dada la naturaleza jurídica de la entidad convocada a pleito. Al discurrir de esa forma, en realidad, y como lo ha explicado la Corte en situaciones análogas a la que convoca ahora su atención, se pretende subsanar irregularidades procesales que debieron corregirse en las instancias, bien por el juzgado de conocimiento interponiendo los recursos pertinentes contra la decisión que ordenó la consulta de la sentencia de primer grado o solicitando al Tribunal que se abstuviera de desatlarla por falta de competencia para ello.

Fueron precisamente estos los razonamientos plasmados en caso de aristas procesales similares a este, donde la Sala que presidía la Dra. María Nancy García García, en la demanda que cursó bajo el radicado 05088-31-05-001-2018-00594-01, al remitirse el expediente para resolver el grado jurisdiccional de consulta, concluyó que:

“(...) Al aterrizar las anteriores circunstancias al caso en concreto, encuentra la Sala que, pese a tratarse de una sentencia de única instancia, y que la misma tuvo un sentido adversarial a los intereses de la parte promotora de la litis, lo cierto es que ello no es suficiente para dar paso a la consulta de la decisión que finalizó la instancia, dado que el extremo activo no tiene la condición de “(...) trabajador, afiliado o beneficiario (...)”, sino que corresponde a una persona jurídica de origen privado, naturaleza que, como puede observarse, no aparece dentro de las clasificación efectuada por la Sentencia de Constitucionalidad, que propendió por salvaguardar los derechos de esa parte débil de la relación jurídica ventilada en sede judicial, pero en parte alguna señaló que ello también procedería cuando una entidad de las características señaladas fuese

quien, como demandante, terminara derrotada con una sentencia totalmente contraria a sus reclamos.

De hecho, resáltese como dicho de paso, que la Sentencia en cita ni siquiera extendió la posibilidad de revisión en consulta en favor de las entidades de derecho público en el evento de llegar a ser condenadas en procesos de única instancia.

Tal como ha sido reconocida por la jurisprudencia, la consulta es un mecanismo para la protección de los derechos mínimos e irrenunciables del trabajador afiliado o beneficiario, a fin de conjurar la afectación o vulneración que pueda derivarse de una sentencia judicial adversa a la totalidad de sus pretensiones. La protección se habilita frente a estos sujetos, para garantía de sus derechos esenciales de índole laboral o prestacional, en consideración al carácter tuitivo, protector del derecho social, por lo que no estando de por medio el derecho del destinatario directo de la prestación, no emerge la condición subjetiva que habilita el grado de consulta.

Por lo anterior es dable considerar equivocada la decisión de remitir el proceso en consulta ante esta Sala, razón por la que, habrá de dejarse sin efectos los Autos emitidos el 8 de marzo de 2022 y el 19 de mayo de 2022, a través de los cuales se admitió erróneamente el grado de consulta y se corrió traslado a las partes para que rindieran sus alegaciones, para en su lugar, declarar inadmisibile el grado de consulta dentro del presente asunto en razón de lo expuesto, disponiéndose la devolución del proceso al juzgado de origen.

Valga aclarar que, no impide asumir la determinación descrita el hecho de que se encuentre en firme una decisión anterior en sentido de admitir la consulta en favor del ente accionante, en atención a que la Sala debe propender por la correcta aplicación del procedimiento, en tanto es deber del Juez de conocimiento, en este caso la Corporación, modificar o revocar las decisiones aun después de estar en firmes, en procura de resolver las distintas vicisitudes con acatamiento de lo señalado en el orden jurídico, conforme lo ha expuesto de antaño la Jurisprudencia Constitucional y Laboral (T-1274-2005 y AL3859-2017) (...)"

En las condiciones anteriores, este ponente se abstendrá de conocer del proceso al declararse improcedente el grado jurisdiccional de consulta y en consecuencia ordenará la devolución del expediente al juzgado de origen para que continúe con el trámite pertinente, toda vez que la entidad demandante no interpuso el recurso de apelación contra la sentencia absolutoria. Consecuencialmente se dejarán sin efectos los autos emitidos en esta instancia a través de los cuales se admitió la consulta de la sentencia y se dio traslado a las partes para presentar alegatos.

Sin costas.

3. DECISIÓN DEL TRIBUNAL

Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Tercera de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, **DECIDE**

PRIMERO: DEJAR sin efectos los autos emitidos el 14 de enero de 2020 y el 9 de agosto de 2022, a través de los cuales se admitió erróneamente el grado de consulta en favor de la

sociedad demandante y se corrió traslado a las partes para que rindieran sus alegaciones, respectivamente, para en su lugar, **DECLARAR** improcedente el GRADO JURISDICCIONAL DE CONSULTA respecto de la sentencia proferida por el Juzgado Diecisiete Laboral del Circuito de Medellín, dentro del proceso ordinario laboral promovido por la sociedad **GRUPO DIGORE S.A.S.** en contra de **COLPENSIONES**, conforme las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: en los términos del poder allegado, se reconoce personería a la Dra. HEIDI DIANA PADILLA CORREA identificada con la cédula de ciudadanía Nro. 44.005. 361 y Tarjeta Profesional Nro. 166.998 del CS de la J., para que continúe representando los intereses de Colpensiones de acuerdo a la sustitución que le hiciere el Dr. Santiago Muñoz Medina en su condición de representante legal suplente de la firma MUÑOZ MEDINA ABOGADOS S.A.S., sociedad a la que dicha entidad le otorgó poder general.

TERCERO: DEVUÉLVANSE el expediente al juzgado de procedencia.

Lo anterior se notificará en **ESTADOS**, y se firma por quienes en ella intervinieron.

Los Magistrados
(Firmas escaneadas)



ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA



MARÍA NANCY GARCÍA GARCÍA



MARTHA TERESA FLOREZ SAMUDIO

CERTIFICO: Que la providencia anterior fue notificada por ESTADOS No. 087 fijados hoy en la secretaría de este Tribunal a las 8 a.m.

Medellín 24 DE MAYO DE 2023

Secretario

CONSULTABLE EN: <https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/147>